

Conversaciones colombianas para el cambio y la paz

Fernando Acosta Riveros*

Resumen

La paz en Colombia se ha convertido en una tarea permanente para muchas organizaciones sociales y dirigentes políticos. También es un anhelo que tienen amplias capas de la población. Dos organizaciones insurgentes: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), surgida en 1964 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya primera acción armada se realizó el 7 de enero de 1965, hace medio siglo, participan en conversaciones para la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Autoridades e insurgentes saben que si no hay un cambio en el modelo económico y político de la nación suramericana será imposible promover la justicia social y, sin esta, nunca habrá verdadera paz.

Introducción

Luego de leer la convocatoria enviada por el Centro de Estudios sobre el cambio y las Instituciones, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, decidí

* Investigador y Periodista, Universidad de Guadalajara.

realizar este trabajo sobre el llamado Proceso de Paz de Colombia, el cual empezó con unas conversaciones entre los dirigentes de las FARC-Ejército del Pueblo y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón en su primer mandato (2010-2014). En noviembre de 2012 se anunció una reunión de carácter urgente en Noruega para acordar el comienzo de las pláticas en La Habana, Cuba, con el apoyo de autoridades noruegas, cubanas y venezolanas.

Algunos colombianos se mostraron escépticos porque desde que estuvo en la presidencia Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) se han efectuado diferentes conversaciones y procesos de paz en los que participaron las FARC y el Movimiento 19 de Abril (M19). Se llegaron a realizar acuerdos, treguas bilaterales, e incluso el surgimiento de un partido político de izquierda como la Unión Patriótica (UP), proyecto político de las FARC, así como la desmovilización de los comandos del M19 y la inserción de sus dirigentes y militantes en esquemas exclusivamente políticos, luego de abandonar la lucha armada, pero fracasaron porque en Colombia no se dieron los cambios necesarios en las áreas económica, cultural y política. Más bien se fortaleció el paramilitarismo de extrema derecha, que vinculado a las organizaciones del narcotráfico, empezó a sabotear los incipientes logros pacificadores y declaró la guerra a quienes participaban en nuevos escenarios democráticos como la UP y la Alianza Democrática M19 (AD-M19).

En los periodos de gobiernos que sucedieron a Betancur Cuartas, a partir de 1986 con Virgilio Barco Vargas (1986-1990); César Gaviria Trujillo (1990-1994); Ernesto Samper Pizano (1994-1998); Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y en los dos cuatrienios de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) hubo conversaciones de paz en medio de la guerra, secuestros, masacres y el proyecto de intimidación y el exterminio contra dirigentes y militantes de la UP, cuyos candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo Ossa en 1990

fueron asesinados por sicarios en combinación con elementos activos del Ejército oficial, en verdaderos crímenes de Estado.

Fue tan elevada la violencia y la persecución a dirigentes progresistas que además de caer muertos candidatos de la UP, también perdieron la vida Luis Carlos Galán Sarmiento, aspirante del Nuevo Liberalismo a la presidencia en 1989 y Carlos Pizarro Leóngomez, dirigente del M19 en abril de 1990, a doce días de firmar con el presidente Virgilio Barco Vargas en Palacio Nacional, los Acuerdos de Paz que incluían la desmovilización de los guerrilleros y la participación activa en política electoral.

Durante los gobiernos de Samper Pizano, Pastrana Arango y Uribe Vélez, hubo acercamientos con la dirigencia del ELN, movimiento armado camilista (continuador de la lucha emprendida por el sacerdote revolucionario Camilo Torres Restrepo). Esta organización, cuya aparición en público se realizó hace medio siglo (1965) mediante la *Toma* de Simacota, población del departamento de Santander, ubicado en el nororiente colombiano, condicionó siempre su participación en procesos de paz a que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente y se elaborara una nueva Carta Magna. La Constitución de 1886 fue superada por la de 1991 que en su Artículo 22 expresa: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Aunque la Constitución aprobada en 1991 menciona el derecho de los ciudadanos a vivir en paz es poco, o casi nada, lo que el Estado colombiano ha procurado para realizar cambios que permitan a la población vivir en armonía y disfrutar de las garantías y libertades. Veinticuatro años después, el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón continúa en conversaciones con las FARC-EP y anuncia la incorporación a un proceso de paz del ELN, cuyos dirigentes, militantes y simpatizantes festejan el 50 Aniversario (1965-2015) de la *Toma* de Simacota y recuerdan que durante medio siglo los insurgentes del ELN, conocidos como *elenos*, han propuesto cambios en la forma de gobernar, apertura

democrática, justicia social y proponen alcanzar un régimen donde los deberes y los derechos sean para todos, sin excepción.

Hablar de paz y hacer la guerra

Como recordó Gabriel García Márquez en su novela *Cien años de soledad*, las autoridades de Colombia son especialistas en simular. Así lo comprobaron durante la llamada Masacre de las Bananeras en 1928, cuando asesinaron a campesinos y trabajadores rurales para quedar bien con los gobiernos de Estados Unidos y su “flamante” empresa multinacional, United Fruit Company. La misma que derrocó en Guatemala al presidente legítimo Juan Jacobo Arbenz Guzmán en junio de 1954.

Dos decenios después del episodio criminal y vergonzoso de las Bananeras, la oligarquía colombiana, con apoyo de gobiernos y monopolios de Estados Unidos, ordenó y consumó la muerte del candidato progresista del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán Ayala, el 9 de abril de 1948. Este nuevo suceso conocido como *El Bogotazo* abrió profundas heridas y desencadenó nuevas acciones violentas. La población gaitanista, dolida por el asesinato de uno de sus líderes, tomó calles, avenidas, incendió almacenes, saqueó, expropió a los empresarios cómplices del crimen y generó un caos que tuvo repercusiones en los departamentos (equivalentes a estados) de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Santander, Tolima y Valle del Cauca durante los años siguientes.

En ese contexto histórico, Eduardo Santos también presidente (1938-1942), y tío abuelo del actual mandatario, así como otros dirigentes del Partido Liberal, entregaron dinero para municiones a las llamadas guerrillas liberales que operaban en diferentes escenarios

de la geografía colombiana. Al asumir la presidencia el general Gustavo Rojas Pinilla, cercano al Partido Conservador en 1956, propuso una amnistía para los insurgentes liberales y habló de reconciliación nacional. No todos los combatientes pactaron con Rojas y en el sur del departamento de Tolima, creció un movimiento liberal socialista dirigido por Pedro Antonio Marín, conocido luego como Manuel Marulanda Vélez, en homenaje a un líder sindical asesinado. Pedro Antonio fue apodado *Tirofijo*.

El asesinato en 1957 del dirigente Guadalupe Salcedo, quien había pactado y se encontraba desarmado, fue un mensaje de la oligarquía siempre dispuesta, durante 67 años, a eliminar a los adversarios políticos. Después del general Rojas Pinilla asumieron la presidencia, primero Alberto Lleras Camargo (1958-1962) de filiación liberal y luego Guillermo León Valencia (1962-1966) dirigente del Partido Conservador. Nuevamente desde el Estado se habló de paz, progreso y reconciliación, mientras se satanizaba a los guerrilleros de los departamentos Tolima y Huila. La derecha, los empresarios y las cúpulas de la iglesia católica, temían que el ejemplo de la Revolución cubana, triunfante en 1959, contagiara a los países de la región. El senador Álvaro Gómez Hurtado comenzó una campaña contra las llamadas “Repúblicas Independientes”, que según él eran zonas dominadas por comunistas que querían alentar el separatismo en la nación suramericana.

Transcurría el mes de mayo de 1964 cuando las autoridades colombianas apoyadas por el gobierno estadounidense diseñaron el Plan Laso (Latin America Security Operation) y desataron la “Operación Marquetalia” destinada a combatir hasta la derrota o la muerte a la insurgencia liberal-socialista que tenía entre sus dirigentes a Pedro Antonio Marín, trabajador agropecuario y líder cooperativista y también a Jacobo Prías Alape. El gobierno envió 16 mil soldados al municipio rural de Gaitanía para combatir y liquidar a la “subversión

comunista". Hubo bombardeos "humanitarios" contra civiles, para llevarles la "Libertad" y conseguir que Colombia "no se fuera a convertir en otra Cuba". Los insurgentes resistieron y unos meses después se agruparon y dieron origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que han combatido con dignidad y resistencia desde entonces y hasta el 2015 a 12 gobiernos. Han luchado con ideas políticas y también mediante la lucha armada, recurso necesario ante la opresión imperialista y oligárquica. Los *farianos*, como se conoce a dirigentes, militantes y simpatizantes de las FARC, también han participado en negociaciones de paz, procurando la participación de otros movimientos de liberación nacional como el ELN, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M19) y la Autodefensa Obrera (ADO).

Desde la administración de Betancur Cuartas y hasta el segundo mandato de Santos Calderón, todos los presidentes, sin excepción, han hablado de paz, mientras continúan participando en la guerra que no solo es militar, sino también económica, ecológica y política. A veces extremadamente violenta y en otras ocasiones, con la simulación de la llamada "democracia representativa".

Las FARC lanzan el proyecto Unión Patriótica

Como parte del compromiso de paz, durante las conversaciones con el gobierno de Belisario Betancur Cuartas, las FARC lanzaron un partido político de izquierda denominado Unión Patriótica (UP). En 1985 arrancó ese nuevo proceso político que fue apoyado por sectores democráticos y personalidades progresistas, como el ex ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Vázquez Carrizosa, de filiación conservadora y promotor de los derechos humanos y la paz. Desde sus inicios, el narcotráfico declaró la guerra a la dirigencia, militancia y

simpatizantes de la UP. Un “prominente” ganadero conocido como Rodríguez Gacha, y luego bautizado como “El Mexicano” por su admiración a los cantantes de mariachi, empezó a ordenar secuestros y asesinatos de líderes, familiares y amigos de la UP.

Al tomar posesión, el presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990), reconoció que la situación estaba deteriorada y era necesario volver a conversar con los dirigentes de los movimientos guerrilleros FARC, ELN, EPL y M19. La UP continuaba sus tareas políticas en medio del llamado Plan de Intimidación y Exterminio, el nuevo regalo que la oligarquía colombiana le daba a la población para protegerla de ideas “exóticas y subversivas”. “Promover la justicia social, procurar el equilibrio, apoyar a los trabajadores del campo, establecer un sistema educativo gratuito y laico, fortalecer la salud pública”, todas ellas propuestas de la UP, las FARC, el ELN y el M19 eran algo irreal, subversivo y debían ser combatidas por los “dueños” de la democracia que ya era analizada por el poeta Gonzalo Arango Arias, fundador del movimiento literario Nadaísmo, como “una desgracia con privilegios para pocos y una desgracia terrible para el resto”.

En octubre de 1987 dos sucesos políticos aceleraron la necesidad de hablar nuevamente de un proceso de paz. Fue asesinado Jaime Pardo Leal, candidato de la UP a la presidencia de Colombia y los principales dirigentes insurgentes anunciaron la unidad en la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). Las amenazas de los narcotraficantes y sus escuadrones de la muerte se convirtieron en crímenes que cegaron la vida de Guillermo Cano, periodista democrático, director del diario *El Espectador* (1986) y de Luis Carlos Galán Sarmiento, (agosto de 1989) quien era aspirante por el Partido Nuevo Liberalismo al principal cargo de la nación.

Continuaron nuevamente las campañas y el proceso electoral, en medio de intimidación y amenazas. Luis Carlos Galán fue reemplazado por César Gaviria Trujillo (1990-1994). Participaron también

Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la UP, asesinado en marzo de 1990 y Carlos Pizarro Leóngomez, ultimado en un avión por sicarios paramilitares el 26 de abril de 1990. Fue reemplazado por Antonio Navarro Wolff, fundador con Carlos del Movimiento 19 de Abril (M19), guerrilla surgida luego del fraude electoral del 19 de abril de 1970 contra la Alianza Nacional Popular (Anapo) y su candidato el ex general y ex presidente Rojas Pinilla.

La insurgencia reunida en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) aprobó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gaviria y representantes de partidos de oposición participaron junto con legisladores y juristas en la aprobación de una nueva *Constitución Política de Colombia* en 1991. En medio de la guerra del narcotráfico liderada por el cártel de Medellín y el grupo llamado “Extraditables” del capo mafioso Pablo Escobar Gaviria, el gobierno de filiación liberal aceptó reunirse con la CGSB en Caracas, Venezuela.

Tres décadas de diálogo y guerra

En 1992 se realizaron varias rondas de conversaciones entre insurgentes y el gobierno de César Gaviria. Primero en Caracas y después en Tlaxcala, México. Durante los llamados procesos de paz continuaron los enfrentamientos armados y la guerra sucia del *narcoparamilitarismo* que dejó miles de desplazados en las principales ciudades: Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Santa Marta y Valledupar, así como nuevas cuotas de exiliados políticos colombianos en varios lugares del mundo. Las FARC y el ELN apostaron entonces por una tregua bilateral, pero las autoridades negaron esa opción con el argumento de que “la guerrilla quería más tiempo para fortalecerse”. Lo que fortalecerá la paz es un cambio definitivo en los modelos

económicos y de mal gobierno, era el mensaje y la bandera de los partidos de oposición.

Ernesto Samper Pizano, político progresista de filiación liberal, asumió el cargo en agosto de 1994 con el compromiso de realizar un proceso de paz y cambiar el rumbo económico de Colombia. Desde Estados Unidos se afilaron baterías para sabotear las buenas intenciones del gobierno. Acusaron a Samper de haber sido beneficiado con dineros del narcotráfico, específicamente del Cártel de Cali y los Hermanos Rodríguez Orejuela. Surgió el llamado “Proceso 8000”, como se denominó a la investigación para descubrir quiénes habían financiado la campaña samperista. Representantes del ELN se reunieron en Maguncia, Alemania, con voceros del gobierno y tuvieron como facilitador a Werner Mauss. En 1998 se realizó la reunión en el Palacio de Viana, Madrid. La dirigencia del ELN envió mensajes sobre las campañas electorales contaminadas por la corrupción. Samper estaba desgastado y de salida. El entonces candidato del Partido Conservador, Andrés Pastrana Arango se comprometió a adelantar la paz con las FARC y visitó el campamento *fariano* donde fue recibido por el legendario Manuel Marulanda Vélez, *Tirofijo*.

Los gobiernos y monopolios estadounidenses que no pudieron derrocar a Samper Pizano, a pesar de todos sus intentos, propusieron a Pastrana Arango la ejecución del llamado Plan Colombia para, supuestamente, acabar con el narcotráfico. Acusaron a las FARC de haberse convertido en un cártel de la droga y enviaron desinformación a todos los continentes para que Pastrana no negociara con narcoterroristas. Pastrana, quien tenía un compromiso con sus electores y con la insurgencia, finalmente instaló conversaciones de paz y aceptó en el año 2000 el despeje de San Vicente del Caguán, zona insurgente, ubicada en el nororiente del país andino-caribeño.

“Por el cambio, hacia una nueva Colombia”, se llamó el pacto suscrito en 1999 entre el gobierno de Pastrana Arango y las FARC-EP.

Voceros del gobierno anunciaban que se pactaba con las FARC la sustitución de cultivos dedicados a insumos del *narco* por aceite de palma. Durante un viaje del mandatario a Malasia fue felicitado en Kuala Lumpur en marzo de 2001 por su intento de frenar el *narco*, detener la guerra y ofrecer cambios en la vida política colombiana. Representantes de ocho países facilitadores, entre ellos, los embajadores de Canadá, Cuba, España, Francia, México, Noruega y Venezuela, visitaron en San Vicente del Caguán a los dirigentes *farianos* y se comprometieron a respaldar el proceso armonizador.

En el año 2002 Pastrana dio un ultimátum a las FARC para desmovilizarse y envió tropas a diferentes zonas con la intención de asesinar, detener, encarcelar o juzgar a sus dirigentes. Una nueva campaña política llevó a las primeras planas al ex gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, acusado por la agencia estadounidense DEA de complicidad con el cártel de Medellín. Organizaciones promotoras de los derechos humanos también lo cuestionaron por haber creado grupos paramilitares con el nombre de Convivir. A pesar de las acusaciones Uribe Vélez se convirtió en presidente de Colombia para el periodo 2002-2006.

Protegido por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el colombiano Uribe comenzó con mano dura hacia la insurgencia y la oposición política. Amigo de los grupos paramilitares, inició conversaciones con las dirigencias de las Autodefensas (de extrema derecha) en 2002. Los gobiernos de España, Francia y Suiza, "preocupados por el deterioro de los derechos humanos en Colombia" le ofrecieron a Uribe participar como facilitadores de la paz y propusieron un encuentro entre el gobierno de Bogotá y las FARC en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. En septiembre de 2006 la opinión pública internacional, especialmente de países de Europa y nuestra América estuvo atenta y envió observadores a Pradera, Colombia, ante la posibilidad de un acuerdo de paz. En ese

mismo mes el ELN envió un comunicado anunciando su disposición de dialogar con voceros del gobierno uribista. Luis Carlos Restrepo, Comisionado de la Paz, viajó al municipio de Itaguí, cerca de Medellín y se entrevistó con líderes *elenos* que estaban presos. Después comenzaron los viajes de funcionarios colombianos hacia La Habana, Cuba para hablar con dirigentes del ELN.

Entre diciembre de 2005 y octubre de 2006 se mantuvo la esperanza de concretar un acuerdo de paz. Dirigentes del Partido Comunista Colombiano (PCC), del Polo Democrático Alternativo (PDA) y personalidades democráticas de los partidos tradicionales Conservador y Liberal, como Álvaro Leyva y Piedad Córdoba apoyaron los encuentros en los que participó como facilitador Gabriel García Márquez, autor de *El General en su laberinto* y promotor de la paz durante 45 años ininterrumpidos.

El secuestro de Ingrid Betancourt, ex candidata del Partido Verde Oxígeno, por un comando de las FARC en febrero de 2002, sirvió a Uribe Vélez, de bandera, buscando reelegirse, estuvo “clamando por su liberación” primero como candidato y luego como jefe de Estado para atacar a insurgentes y a sus simpatizantes, mientras incrementaba métodos de Terrorismo de Estado. Sacó provecho de la situación, promovió la reelección y salió elegido para un segundo periodo entre 2006 y 2010.

Durante el segundo periodo de gobierno, Uribe Vélez, declaró su guerra frontal a las FARC y en marzo de 2008 violó el territorio de Ecuador para asesinar a Raúl Reyes, comandante insurgente quien se encontraba participando de un Congreso Bolivariano, donde varios civiles simpatizantes de los *farianos* y procedentes de diferentes países de nuestra América se enteraban del proyecto revolucionario y las posibilidades de participar en un eventual proceso de paz. Un grupo de estudiantes mexicanos de la UNAM y del Instituto Politécnico, perdieron la vida durante los bombardeos contra el campamento de paz.

Abril y mayo de 2008 fueron meses de desencuentros entre los gobiernos de Venezuela Bolivariana, Ecuador y Nicaragua con el colombiano Uribe Vélez quien propuso a Estados Unidos la instalación de nuevas bases militares para “proteger al país de ataques subversivos con apoyo extranjero”, refiriéndose a los gobiernos de Hugo Chávez Frías, Rafael Correa Delgado y Daniel Ortega Saavedra. El mandatario colombiano fue denunciado ante las organizaciones de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas (ONU) por violación de la soberanía ecuatoriana y amenaza bélica contra naciones de nuestra América. La complicidad entre George W. Bush y Uribe Vélez, con el pretexto de combatir el terrorismo, colocó a Colombia como el escenario para atacar a gobiernos progresistas que se unieron en la llamada Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

La guerra de Uribe provocó indignación entre amplios sectores de la población. Durante las campañas de 2010, Juan Manuel Santos Calderón, quien había sido ministro de defensa en el régimen uribista, cuestionó la política exterior y ofreció a la población que si le daban su voto, mejoraría las relaciones con los países vecinos, principalmente con Venezuela, nación hermana con la cual tiene proyectos económicos durante varias décadas, independientemente de los gobiernos o ideologías que predominen en el Palacio de Miraflores de la capital bolivariana.

Santos Calderón tomó posesión el mes de agosto de 2010 e inició su primer periodo de gobierno. Mejoró las relaciones con sus vecinos pero siguió persiguiendo a ecologistas, sindicalistas y trabajadores que supuestamente simpatizaban con las FARC-EP y el ELN. Un hermano suyo, Enrique Santos Calderón, periodista administrador de la revista *Alternativa* que fundó Gabriel García Márquez en la década de 1970, le sugirió al mandatario que volviera a explorar el camino de conversaciones con los insurgentes. La guerra continuaba y el

comandante *fariano* Alfonso Cano, fue asesinado por militares que antes de liquidarlo físicamente, preguntaron al Presidente, qué hacer con él, cuando lo tenían sitiado. Juan Manuel Santos dejó en libertad a los militares para que hicieran “lo que conviniera a las instituciones”.

En un acto de caballerosidad, humanismo y solidaridad con los miles de colombianos que desean la paz, la dirigencia de las FARC-EP aceptó conversar con el gobierno de Santos, no porque la insurgencia fariana estuviera derrotada, sino como un compromiso político con la patria del gran demócrata Jaime Pardo Leal. Los meses de noviembre y diciembre del año 2012 tuvieron como tema político la reanudación de conversaciones que inició con un acto de protocolo en Noruega y continuó en La Habana, Cuba.

Negociar la paz en medio de la guerra fue la disposición de Santos Calderón. Dirigentes de los diferentes partidos políticos, promotores de derechos humanos, representantes de iglesias y comunidades religiosas le pidieron concertar una tregua bilateral para acelerar el proceso y enviar mensaje de armonización a Colombia y el mundo. Santos no cambió su estilo y se preparó para reelegirse, mostrándose como “el candidato-presidente de la paz”.

Elecciones y plebiscito por la paz

En la primera vuelta electoral quedaron empatados dos candidatos de derecha: Oscar Iván Zuluaga del Partido de Centro-Democrático, fundado por Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, presidente con aspiración reeleccionista. Ante el peligro que representaba para la paz y la vida de los colombianos, el regreso del uribismo al Poder Ejecutivo, la candidata de izquierda Clara López Obregón, del Polo Democrático Alternativo, apoyada por la Unión Patriótica decidió apoyar con su

voto a Santos Calderón en la segunda y definitiva vuelta donde la elección fue convertida en un plebiscito por la paz.

Los diálogos en La Habana continuaron y las partes alcanzaron un acuerdo en temas agrarios y económicos para enfrentar al narcotráfico. La ONU felicitó a las dos partes por algo que Estados Unidos “considera fundamental”. Después de la segunda vuelta un titular del periódico estadounidense *The New York Times* expresó: “En Colombia, un presidente de derecha se mantiene en el poder con el apoyo de la izquierda”. Clara López, ex candidata y presidenta del Polo Democrático Alternativo explicó: “He tomado la decisión en conciencia de votar y promover el voto por la posición que representa en materia de paz y de relaciones exteriores el presidente Juan Manuel Santos e invité a quienes comparten mis razonamientos a acompañarme en esta determinación”.

Acelerar el proceso y conseguir la paz

Al gobierno de Santos Calderón le urge desde que comenzó su segundo mandato el pasado mes de agosto de 2014 que se concrete un acuerdo de paz con las FARC-EP y también ha invitado a dirigentes y militantes del ELN a participar en diálogos. Los dos movimientos insurgentes han demostrado vocación de conversar en aras de la paz, pero no de rendirse, ni abandonar sus ideales, como lo sueñan en las cúpulas oligárquicas que aspiran a que aparentemente todo cambie, para que todo siga igual, es decir peor.

Las autoridades colombianas reconocieron en la primera quincena de enero de 2015 que las FARC-EP cumplieron con su tregua anunciada en diciembre anterior. Anunciaron que también están listos para conversar con la dirigencia del ELN. Al cumplirse el 50 aniversario de la Toma de Simacota, los camilistas rojinegros realizaron una co-

municación pública a Colombia y el mundo, en la cual manifiestan: “El gobierno de Juan Manuel Santos tiene la disyuntiva de persistir en su política de guerra y pacificación o atreverse a transitar por un verdadero camino de paz deseado por todos los colombianos. La disputa por la democracia y la paz que se libra en campos y ciudades requiere poner al centro lo que nos une, para construir una Colombia nueva y soberana”.

Cincuenta años atrás, durante el mes de enero de 1965, los *elenos* publicaron y divulgaron el Manifiesto de Simacota, para explicar por qué acudían a la lucha armada en el proyecto político libertario: “La educación se encuentra en manos de negociantes que se enriquecen con la ignorancia en que mantienen a nuestro pueblo; la tierra es explotada por campesinos que no tienen donde caer muertos y que acaban sus energías y la de sus familias en beneficio de las oligarquías que viven en las ciudades como reyes; los obreros trabajan por jornadas de hambre sometidos a la miseria y la humillación de los grandes empresarios extranjeros y nacionales; los profesionales e intelectuales jóvenes demócratas se ven cercados y están en el dilema de entregarse a la clase dominante o perecer; los pequeños y medianos productores tanto del campo como de la ciudad ven arruinadas sus economías ante la cruel competencia y acaparamiento por parte del capital extranjero y de sus secuaces *vende patria*; las riquezas de todo el pueblo colombiano son saqueadas por los imperialistas norteamericanos”.

Al gobierno neoliberal de Santos no le interesa profundizar más en los temas económicos, de justicia y de política para el futuro de Colombia. Él sueña, como lo soñaron sus antecesores, también neoliberales, César Gaviria Trujillo y Andrés Pastrana Arango, que la insurgencia entregue las armas, pida perdón y se dedique solamente a participar en elecciones. Santos se olvida de las masacres y crímenes cometidos por el Estado colombiano, no solamente contra inte-

grantes de las guerrillas elena y fariana, sino contra desempleados, estudiantes, sindicalistas, trabajadores de la ciudad y el campo, así como la persecución directa o tolerada a personalidades democráticas como la ex senadora Piedad Córdoba a quien la oligarquía y el imperio no le perdonan su amistad con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ex presidente venezolano y amigo destacado y sincero del pueblo colombiano.

Conclusiones

Las FARC-EP y el ELN colombianos no son organizaciones terroristas como lo han manifestado diferentes gobiernos y medios de comunicación, dentro y fuera del país suramericano, como los diarios mexicanos *Excélsior*, *El Universal*, *Milenio* y las empresas de televisión: Azteca y Televisa. En las conversaciones de paz iniciadas en noviembre de 2014 en la capital cubana ha quedado expuesto parte del programa político de la insurgencia fariana donde se destaca que las autoridades abandonen el neoliberalismo, consulten a la población, informen la verdad y cumplan con los deberes y otorgamiento de derechos y garantías a la población.

Desde los partidos, organizaciones sociales de izquierda y promotores de derechos humanos, pensadores destacados sugieren realizar un plan de emergencia humanitaria para los 200 municipios más victimizados del conflicto armado; lograr el otorgamiento de la seguridad a ciudadanos de todo el territorio colombiano; reformar los cuerpos de la Policía Nacional hasta convertirla en una institución que juegue un papel civilizador en el pos conflicto; dinamizar la política de relaciones exteriores, basándose en el respeto, la defensa de la soberanía y la promoción integradora y solidaria con los pueblos de nuestra América.

Siguen pendientes en la patria del sacerdote insurgente Camilo Torres Restrepo una reforma de la justicia; el reconocimiento institucional a la oposición política; la participación democrática no solamente en procesos electorales sino en lo que significa una democracia participativa; los avances sociales y el respeto por la movilización social y política que hasta inicios del año 2015 ha sido criminalizada, mientras el narco y los grandes evasores y ladrones viven libres gracias a la complicidad y la impunidad que tienen en el actual sistema.

Bibliografía

- ARENAS, Jacobo (1985). *Cese al fuego. Una historia política de las FARC*. Colombia: Oveja Negra.
- ARREGUI, Ion (1994). *Voces de Colombia. Mirada a una sociedad urgente*. Donostia (Gipuskoa). País Vasco: Hirugarren Prentsa: S.L.
- CALARCÁ, Marco León (1999). *FARC-EP. Esbozo histórico*. Caracas, República Bolivariana de Venezuela: Edición de la Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
- LÓPEZ OBREGÓN, Clara, et al. (2013). *La izquierda del siglo XXI. Definición conceptual. Perspectivas*. Colombia: Aurora.
- (2014). *La izquierda democrática actúa. Elecciones 2014; conceptos, entrevistas, documentos*. Colombia: Aurora.
- LOZANO GUILLÉN, Carlos (2006). *¿Guerra o paz en Colombia? Cincuenta años de un conflicto sin solución*. Colombia: Ediciones Izquierda Viva y Ocean Sur.
- Ortega Torres y Jorge Ortega (comp.) (1991). *Constitución Política de Colombia*. Santa Fé de Bogotá. Colombia: Temis.

- (2001). *El Espectador*. Núm. 33.452. 2 de marzo. Colombia.
- (2015). *La Jornada*. Núm. 10,937. 14 de enero. México.
- (2008). "Memoria". En *Revista del Cemos*. Núm. 229. Mes de abril. Ciudad de México.
- (2000, 2001). "Resistencia". En *revista de las FARC-EP*. Núm. 25. noviembre a febrero. Armenia, Quindío, Colombia.